



VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo **1109/2025-V**; y,

RESULTANDO

Amparo indirecto 1109/2025-V

PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el **veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco** en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, remitida el cuatro siguiente a este órgano jurisdiccional cuyo conocimiento le correspondió por razón de turno, *********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que se señalan en el considerando segundo de la presente resolución.

La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los que tutelan los artículos **1, 14, 16 y 17** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de **dos de abril de dos mil veintidós**, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y, se ordenó dar la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita.

Por auto de nueve de abril de dos mil veinticinco, se tuvo ampliando la demanda de amparo respecto del oficio *********, suscrito por el Secretario de la **Tesorería de Finanzas del Municipio de Guadalupe, Zacatecas.**

Seguido el juicio por sus trámites legales se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



3 38 1792 420 1021

cual se desahogó al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia; y,

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Juzgado **Primero** de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General **3/2013**, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos emitidos por autoridades con residencia en el territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal.

SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de derechos deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo.

En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que reclama:

Del Presidente Municipal, Representante legal y Titular de la Tesorería y Finanzas, todos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

La orden de bloqueo que le impide renovar por la **anualidad dos mil veinticinco** la licencia de funcionamiento de comercio, licencia de alcohol y padrón municipal, correspondiente al negocio “** *****

***** **

***** **

Amparo indirecto 1109/2025-V

Del Titular de la Tesorería y Finanzas del Municipio de Guadalupe, Zacatecas:

El ***** suscrito el **veintiocho de marzo de dos mil veinticinco**, que contiene la orden de que a partir del día **primero de abril de dos mil veinticinco**, no ar en funcionamiento el establecimiento “**

***** **

***** **

***** , por lo que de hacer caso omiso se hará acreedor de las sanciones que esa autoridad determine.

120638140000
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
VACANTE

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Del Inspector de Alcoholes y del Comercio de Ejecución Fiscal del Municipio de Guadalupe, Zacatecas:

La clausura, multa o cualquier acto administrativo por no tener renovada por la **anualidad dos mil veinticinco**, la licencia de funcionamiento de comercio, licencia de alcohol y padrón municipal, correspondiente



Representante legal, Titular de la Tesorería y Finanzas, y Inspector de Alcoholes y del Comercio de Ejecución Fiscal, todos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, al rendir su informe justificado, si bien refirieron que no son ciertos los actos reclamados, de las diversas aseveraciones externadas se advierte que reconcomieron la existencia del acto atribuido, máxime que respecto del inspector al ser reclamados los actos en vía de ejecución deben tenerse como consecuencia de los realizados por las autoridades ordenadoras.

Sirve de apoyo, el criterio pronunciado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, Página 391, Materia Común Registro 211004, de contenido:

“ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.”

CUARTO. Causas de improcedencia no actualizadas. La autoridades responsables refieren se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

Por otra parte, las autoridades responsables hacen valer la causal de improcedencia contenida en el artículo **61, fracción XX**, toda vez que refieren que la parte quejosa debió de agotar el principio de definitividad, en virtud de que la Legislación local prevé el Juicio de nulidad, para atacar las actuaciones que en esta instancia constitucional combate.

Sin embargo, resultan inoperantes las anteriores aseveraciones, pues existe jurisprudencia que da respuesta cabal a dicha temática.

En efecto en la jurisprudencia 17/2024, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación estableció que no existe obligación de agotar el juicio de nulidad previsto entre otra en la legislación de los Estados de Zacatecas antes de acudir al juicio de amparo, toda vez que el plazo que prevé para resolver respecto de la suspensión del acto impugnado es mayor (tres días) al que dispone la Ley de Amparo (veinticuatro horas), motivo por el cual se actualiza una excepción al principio de definitividad establecido en los artículos 107, fracción IV.

Dicha jurisprudencia es del tenor siguiente:

“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES INNECESARIO AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PORQUE LAS LEYES LOCALES ESTABLECEN UN PLAZO MAYOR QUE LA LEY DE AMPARO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE ZACATECAS Y DE HIDALGO).

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes al analizar si se actualiza o no un supuesto de excepción al principio de definitividad para acudir al juicio de amparo indirecto sin agotar previamente la instancia contenciosa administrativa local, llegaron a posturas contrarias en cuanto al tiempo que se prevé en las legislaciones de los



**Amparo
indirecto
1109/2025-
V**

Estados de Zacatecas y de Hidalgo para emitir el acuerdo correspondiente a la suspensión del acto impugnado.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no existe obligación de agotar el juicio de nulidad previsto en las legislaciones de los Estados de Zacatecas y de Hidalgo antes de acudir al juicio de amparo, porque el plazo que prevén para resolver respecto de la suspensión del acto impugnado es mayor (tres días) al que dispone la Ley de Amparo (veinticuatro horas), motivo por el cual se actualiza una excepción al principio de definitividad establecido en los artículos 107, fracción IV, constitucional y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.

Justificación: El mencionado artículo 107, fracción IV, establece como excepción al principio de definitividad, que no existe obligación de agotar el juicio, recurso o medio de defensa legalmente previsto cuando en éste se establezca un plazo mayor al de la Ley de Amparo para otorgar la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse. De los artículos 112 y 139 de la ley de la materia se advierte que en el juicio de amparo se fija el plazo de veinticuatro horas posteriores a que se presentó la demanda de amparo o, en su caso, desde que la petición se turna, para que el Juez de Distrito se pronuncie sobre la suspensión provisional. En contraste, de los artículos 120 y 121 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, en relación con el 161, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad, así como de los artículos 35 y 36 de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, relacionados con el 88 del Código de Procedimientos Civiles para ese Estado, deriva que el plazo para otorgar la suspensión en el juicio contencioso administrativo es de tres días posteriores al último trámite o de la promoción correspondiente. Consecuentemente, como las leyes locales establecen un plazo mayor para otorgar la suspensión del acto impugnado que el contenido en la Ley de Amparo, se actualiza una excepción al principio de definitividad que permite acudir al juicio de amparo indirecto sin agotar previamente el juicio contencioso administrativo.”¹

En consecuencia, es claro que la parte quejosa no estaba obligada a agotar el principio de definitividad que

¹ Registro digital: 2028477. Instancia: Segunda Sala. Undécima Época. Materia(s): Común, Administrativa. Tesis: 2a./J. 17/2024 (11a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Marzo de 2024, Tomo IV, página 3926. Tipo: Jurisprudencia.



refieren las autoridades responsables.

QUINTO. En consecuencia, al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia, procede analizar el fondo del asunto **sin la transcripción de los conceptos de violación**, al no existir en la Ley de Amparo precepto alguno que así lo estatuya, sin transgresión a los principios de congruencia y exhaustividad, como se expone en la jurisprudencia de rubro:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X “De las sentencias”, del título primero “Reglas generales”, del libro primero “Del amparo en general”, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.”²

SEXTO. Análisis de Constitucionalidad. Es **fundado** el concepto de violación planteado.

La parte quejosa, esencialmente refiere que el no

² Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Novena Época, mayo 2010



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo indirecto
1109/2025-V

permitirle renovar la licencia de funcionamiento de comercio, licencia de alcohol y padrón municipal, correspondiente al negocio “** ***** *****”

***** ** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** lo deja en estado de indefensión; toda vez que al intentar realizar el pago respectivo, se le negó el trámite bajo el argumento de que existe una orden de las autoridades municipales para que no pueda renovar dicha licencia por el año dos mil veinticinco, sin que se le externara motivo o explicación alguna.

Asimismo, respecto del acto reclamado consistente en la determinación contenida en el oficio ***** , relativa a que a partir del primero de abril de dos mil veinticinco, no deberá estar en funcionamiento el establecimiento “** ***** ***** **”

***** ** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** , por lo que de hacer caso omiso se hará acreedor de las sanciones que esa autoridad determine; aduce se viola en su perjuicio la garantía de audiencia, al carecer de fundamentación y motivación, y que el referido oficio lo dirige a un tercero.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ
JEFATURA DE LA FERIAZ
06/04/2025

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ESD

fundados los argumentos reseñados.



3 381794 440102

De la interpretación armónica y sistemática del precepto señalado, en lo conducente, se advierte que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por autoridad competente, que funde y motive su determinación.

Así, para que se cumpla el imperativo constitucional de la fundamentación y motivación, a que alude el segundo de los preceptos reproducidos, los actos de autoridad deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (**fundamentación**).

b) Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (**motivación**).

c) Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación).

Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia común, página 166, la cual dice:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del



acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.”

Amparo indirecto
1109/2025-V

Los anteriores requisitos que vienen a ser subprincipios de legalidad, son indispensables para catalogar a un acto de autoridad como constitucional, pues esos mínimos permiten al gobernado obtener certeza y seguridad jurídica sobre el actuar de la autoridad.

Por tanto, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendiente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos; a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen.

Así, la motivación es dar razonamientos que sirvan para demostrar una proposición, es deducir o inferir consecuencias o razones en apoyo de una cosa, con base en ello, toda autoridad tiene la obligación o deber constitucional de motivar sus resoluciones judiciales.

Luego, en el caso concreto el quejoso se duele de la orden de no permitir renovar la licencia de funcionamiento de comercio, licencia de alcohol y padrón municipal, correspondiente al negocio “** *****

***** ** ***** ** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** **

***** ***** ***** , orden que efectivamente, la responsable realiza sin otorgarle garantía de audiencia, toda vez que refiere que sin dar

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



explicación alguna, le impidieron realizar dicho trámite, sin que la responsable haya desvirtuado tal aseveración,

Asimismo, respecto la diversa orden de **veintiocho de marzo de dos mil veinticinco**, por la que indican que a partir del día **primero de abril de dos mil veinticinco**, no deberá estar en funcionamiento el establecimiento “**

*****”, ya que de hacer caso

omiso se hará acreedor de las sanciones que esa autoridad determine; si bien es cierto, la misma es dirigida a un tercero, el contenido y apercibimiento realizado, de ejecutarse perjudica la espera jurídica del propietario de la negociación precitada, por lo que, es inconcuso que se encuentra frente a un acto violatorio de la garantía de audiencia; actuaciones las anteriores que la responsable reconoció.

Permita al quejoso (de no existir **impedimento legal alguno**) la expedición de la licencia de funcionamiento de comercio, licencia de alcohol y padrón municipal correspondiente al establecimiento denominado *********,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

***** ** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** o en caso,

de existir algún impedimento legal para tal efecto, de manera fundada y motivada, lo notifiquen al quejoso.

2. No se ejecute en contra de la negociación denominada “** ***** ***** *****

***** ** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** , el oficio

número ***** , suscrito por el secretario de la Tesorería y Finanzas del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, y dirigido a *****

***** ** ***** ***** ***** **

***** ***** ***** ***** ***** *****

persona moral diversa al propietario de dicho establecimiento.

Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución al reclamarse los mismos en vía de consecuencia.

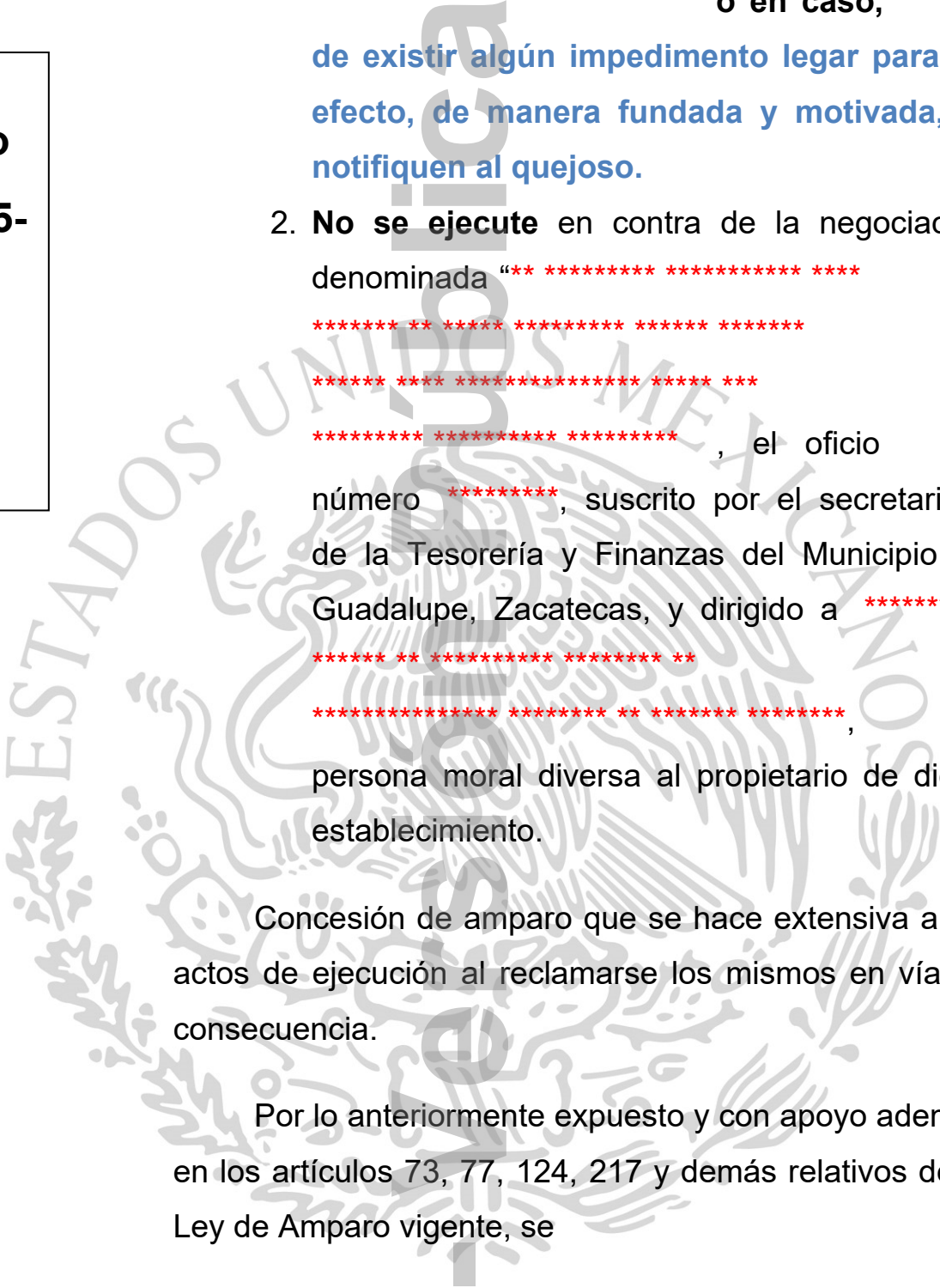
Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 77, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se

RESUELVE:

ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***** ***** ***** ***** ***** contra el acto que reclamó al **Presidente Municipal del Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas y Subdirector de vialidad de la Dirección de Seguridad**, por los motivos y fundamentos expuestos en el **último** considerando de esta sentencia.

Notifíquese, personalmente.

Amparo indirecto
1109/2025-V



3 38 1794 440 102

Así lo resolvió y firma **Rodolfo García Camacho**, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante **Angélica Bobadilla Larios**, secretaria Proyectista de juzgado, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy **veintiocho de agosto de dos mil veinticinco**, en que lo permitieron las labores de este juzgado.

En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del **veintinueve de agosto de dos mil veinticinco**, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, **hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica**; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. **Doy fe.**